



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: EJECUTIVO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-002-2011-00072-01 (E2-23-003)
Accionante: PROTECCIÓN S.A.
Accionada: SOCIEDAD INVERSIONES KATYBA Y CIA LTD y OTROS.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-002-2011-00072-01 (E2-23-003), instaurado por PROTECCIÓN S.A. en contra de la sociedad INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA, y sus socios OLGA LUCÍA PANIAGUA LARREA y DAYRON GRISALES MARÍN, con el objeto de decidir el recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de la pasiva contra el auto mediante el cual se resolvieron las excepciones de mérito formuladas, proferido el 14 de diciembre de 2022 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. PROTECCIÓN S.A., actuando a través de apoderada judicial, promovió demanda ejecutiva en contra de INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA, y sus socios OLGA LUCÍA PANIAGUA LARREA y DAYRON GRISALES MARÍN, solicitando se libre mandamiento de pago por \$19.592.774 por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes a pensión obligatoria; por \$7.546.602 por concepto de intereses de mora causados y no pagados hasta el 20 de octubre de 2010; los intereses de mora que se causen a partir del requerimiento por mora y hasta que el pago real y efectivo se verifique en su totalidad, y las costas procesales. (fol. 1 a 9 archivo No 01 Demanda).

1.2 Mandamiento de pago. Mediante auto del 30 de abril de 2012 (Fols. 1 a 4 archivo No 04 ejecutivo), se libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A., y en contra de la SOCIEDAD INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA., con NIT 900.128.317-5, al igual que los socios del deudor, deudores solidarios OLGA LUCÍA PANIAGUA LARREA identificada con C.C. 43.672.242 y DAYRON GRISALES MARIN identificado con C.C. 98.545.867, así:

- a) Por la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$19.592.774.00), por concepto del capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en Pensión Obligatoria.*
- b) Por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/C (\$7.546.602.00), por concepto de intereses de mora causados y no pagados hasta el día 20 de octubre de 2020.*
- c) Por valor de los intereses de mora que se causen a partir del 20 de octubre de 2010 y hasta que el pago real y efectivo se verifique en su totalidad”.*

1.3 Contestación de INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA, y sus socios OLGA LUCÍA PANIAGUA LARREA y DAYRON GRISALES MARÍN.: Los ejecutados contestaron la demanda a través de curador Ad- Litem, proponiendo como excepción la de inexistencia de la obligación. (fol. 1 a 11 archivo No 63).

1.4 Auto Apelado. En audiencia del 14 de diciembre del 2022, el a quo ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA, y sus socios OLGA LUCÍA PANIAGUA LARREA y DAYRON GRISALES MARÍN; condenó en costas a la parte demandada. (Fol. 1 a 2 archivo No 73, con audiencia virtual archivo No 74).

En lo que interesa a la cuestión litigiosa, adujo que los ejecutados propusieron la excepción de inexistencia de la obligación, con sustento en que debía la AFP ejecutante demostrar el vínculo laboral y los extremos laborales de los trabajadores a los que alude hubo una falta en la obligación del pago de la seguridad social, ante lo cual, expresó el a quo que no le corresponde a la AFP demostrar la existencia de la relación laboral, en tanto que de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 la AFP hace la liquidación mediante la cual se determina el valor adeudado y aquel prestara mérito ejecutivo; además se aportó el título ejecutivo No 000700050 por valor de \$27.139.376 del 20 de octubre de 2010, el requerimiento por mora con fecha del 25 de mayo de 2010, el estado de cuenta hasta marzo de 2010 e intereses hasta octubre de 2010, respecto de todos los trabajadores con los cuales se predica la mora. En esa medida, la deuda esta detallada conforme lo establece la ley y adicionalmente no se atacaron los requisitos del título a través del recurso de reposición conforme lo establece el artículo 430

del CGP, y de consiguiente, se ordenó seguir adelante con la ejecución. En últimas, gravó en costas a la ejecutada.

1.5 Impugnación y límites del ad quem. Inconforme con la anterior decisión, la parte ejecutada interpuso el recurso de alzada, la que impetró que no se acceda a las pretensiones y se tenga en cuenta la excepción propuesta de inexistencia de la obligación, ya que la sola manifestación de Protección S.A. de que dichos trabajadores laboraron para la empresa INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA en liquidación, representada por los demandados Olga Lucía Paniagua Larrea y Dayron Grisales Marín, no corresponde a que efectivamente se haya desarrollado un vínculo laboral; que el fondo de pensiones incurrió en la prescripción del artículo 817 del Estatuto Tributario que dispone que dichas entidades tienen un término de cinco años para ejercer la acción de cobro contra el empleador, lo cual no aconteció.

1.6 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación se admitió el 16 de enero de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 30 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1o del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito que estimaren pertinentes, siendo que ninguna de las partes hizo uso de esa oportunidad procesal.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1 Apelación de auto y principio de consonancia. El recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada se estudiará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 66A del CPTSS, consagratorio del principio de consonancia, esto es, teniendo en cuenta los puntos y materias objeto de inconformidad, expuestos por la recurrente.

2.2 Problema jurídico. Corresponde a la Sala dilucidar el siguiente problema jurídico: **i) ¿Se equivocó el a quo al declarar no probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta y seguir adelante con la ejecución?** y **ii) Si ¿Hay lugar a estudiar la excepción de prescripción?**

2.3 Inexistencia de la obligación. Para decidir respecto de la legalidad de la providencia impugnada, mediante la cual se declaró no probada la excepción de inexistencia de la obligación, cumple recordar que sobre la temática del cobro de aportes para el sistema general seguridad social por las administradoras públicas y privadas que lo integran, debe acudirse a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, que establece la facultad de las administradoras para adelantar las acciones de cobro ante el incumplimiento del empleador en el pago de los aportes que debe realizar a dicho sistema, conforme lo estatuido en el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, el cual es del siguiente tenor:

“En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”.

Igualmente, está establecido sobre el tema, que el mandamiento ejecutivo se libra con base en el título ejecutivo constituido según los lineamientos establecidos en la Resolución 444 de 2013, subrogada por la Resolución 2082 de 2016, mediante las cuales la UGPP establece “los estándares de cobro que deben implementar las Administradoras del Sistema de la Protección Social”, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 178 de la Ley 1602 de 2012, norma que dispone que: “Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán adelantando las acciones de cobro de la mora registrada de sus afiliados, para tal efecto las administradoras estarán obligadas a aplicar los estándares de procesos que fije la UGPP. (...)”.

Descendiendo al sub examine, debe tenerse en cuenta que la parte recurrente insiste en que la AFP PROTECCIÓN S.A. debía demostrar el vínculo y extremos laborales de los trabajadores que se relacionan como laborantes de la empresa INVERSIONES KATYBA Y CIA LTDA en liquidación y respecto de los cuales se predica la mora en los aportes a la seguridad social, aspecto que de entrada resulta infundado, ya que desconoce la apoderada judicial que aquí se está adelantando un proceso ejecutivo laboral y no un proceso ordinario laboral, siendo que para efecto del proceso ejecutivo laboral la AFP debe acreditar el título ejecutivo conforme lo establece el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, y demás normas complementarias como se relacionaron en precedencia, más no que debe entrar a demostrar aspectos de índole laboral de los trabajadores vinculados a la entidad ejecutada y de los cuales se predica la falta de pago de los aportes a la seguridad social, dicho de otra manera, para el reclamo por la vía ejecutiva no se requiere la demostración del vínculo laboral de los trabajadores sobre los que incurrió en mora el empleador, pues este aspecto no se puede ventilar en desarrollo de un el

proceso ejecutivo, y en todo caso, en el evento en que la administradora de pensiones estuviere reclamando por la vía ejecutiva aportes pensionales de un trabajador que no sea parte de la nómina de la entidad ejecutada, le corresponde es a dicha entidad demostrar que lo cobrado por el mentado trabajador no es su obligación o en el evento de haber realizado el pago y que el mismo no se refleje ante la AFP, pues le corresponde acreditar los pagos realizados, pero en modo alguno puede asentarse que la AFP tenga que entrar a acreditar aspectos de índole laboral de los trabajadores sobre los cuáles no se hizo los aportes pensionales por parte de la entidad empleadora y ahora ejecutada.

En ese orden, como la excepción propuesta de inexistencia de la obligación tiene sustento en temas que escapan de la órbita del proceso ejecutivo, no hay lugar a la prosperidad de la misma, tal como acertadamente lo determinó el a quo, máxime cuando la parte ejecutada teniendo la oportunidad procesal de atacar el título ejecutivo de conformidad con el artículo 430 del CGP, se sustrajo a ello.

2.4 Prescripción. En lo que hace este punto de apelación, cumple decir que revisado con detenimiento el escrito de contestación de demanda ejecutiva (Fol. 1 a 5 archivo No 063), los ejecutados no solicitaron como medio exceptivo el de prescripción, ni tampoco hizo mención dicha figura en algún apartado de su respuesta. En consecuencia, la Sala estima que ante su ausencia no es viable su estudio, pues dicho medio exceptivo debió proponerse en momento oportuno y no como soporte de impugnación.

En ese sentido, si los ejecutados pretendían extinguir la obligación a través de la prescripción, necesariamente debió alegarse en forma expresa en la contestación al libelo incoativo, para que no sólo esta instancia pudiese estudiarla, sino, discutirse por ambas partes, valorarse en primera instancia y, determinar si había lugar a declararla probada total o parcialmente o, a lo sumo, no demostrada.

A lo anterior se auna, cuando aquella no puede ser decretada de oficio por prohibición expresa del artículo 282 del CGP, que también señala que, si no se formula este medio exceptivo oportunamente, se entiende que se renuncia a ella. A propósito, es preciso traer sobre tal aspecto a colación la sentencia SL 4767 de 2018, en la que se indicó que ***“la prescripción es renunciable, susceptible de interrupción o suspensión y solo será objeto de pronunciamiento judicial cuando se proponga como excepción”***.

Colofón de lo dicho, habrá de impartirse confirmación al proveído opugnado.

2.5 Costas. Sin costas en esta instancia por no haberse causado. Las de primera se confirman.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral,**

RESUELVE


PRIMERO: CONFIRMAR el auto adiado el 14 de diciembre de 2022 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, según y conforme lo expuesto en la parte motiva del proveído venido en apelación.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, con arreglo a lo previsto en el artículo 41 literal c) del CPTSS.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA
LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los
ESTADOS n.º 130, fijados en la
secretaría del Tribunal, hoy treinta y uno
(31) de julio de **2023** a las 08:00am, los
cuales pueden ser consultados en

["Publicación de Estados Electrónicos SL-
TSM"](#)

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario